



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

Quibdó, diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis (2016).

**AUTO INTERLOCUTORIO No. 074**

<b>REFERENCIA:</b>	<b>MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN DE TERRITORIOS INDÍGENAS</b>
<b>RADICADO:</b>	27001-31-21-001-2016-00039
<b>SOLICITANTE:</b>	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas-Dirección de Asuntos Étnicos.
<b>TERRITORIO:</b>	Resguardo Indígena Chidima, Tolo y Pescadito.

**SOLICITUD**

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS-DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS, (en adelante URT.DAE), a través de su representante, con notas civiles y profesionales acreditadas en el dossier, solicita medida cautelar preventiva en aras de protección de los derechos colectivos al territorio de que es titular las comunidades Indígenas de los Resguardos de Chidima Tolo y Pescadito.

1. Medida Cautelar consistente en el estudio inmediato y urgente de las condiciones de seguridad de los líderes y comunidades de los Resguardos Indígenas Chidima Tolo y Pescadito.
2. Se adopten procesos de fortalecimiento y dotación para la creación de la guardia indígena para los Resguardos asociados al Cabildo Mayor Indígena del Darién Chocoano-CAMIDACH.
3. Diseño y puesta en marcha de un programa de desminado humanitario, y la implementación de una estrategia para combatir la problemática de la extracción ilegal de minerales que actualmente se realizan en la zona de afluencia de la quebrada Reynaldo y otros.
4. Adelantar de manera urgente y prioritaria las investigaciones para identificar, juzgar y condenar a los responsables de las amenazas



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoessrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

- y demás delitos contra las autoridades étnicas y las comunidades de los resguardos Chidima Tolo y Pescadito.
5. En el marco de los operativos de la Fuerza Pública contra el Clan Úsuga: Que se abstengan de levantar campamentos o puestos de mando en áreas del territorio ancestral de las comunidades del Resguardo.
  6. también solicitan que se brinde con carácter de urgencia atención humanitaria y asistencia alimentaria a las comunidades indígenas mencionados, ello con enfoque étnico diferencial concertado con las comunidades.
  7. Que se ordene la inscripción de la medida en los 29 predios identificados en el acápite de identificación del territorio sobre los cuales hay pretensión de unificación, en aras de proteger el territorio ancestral ante la dilación injustificada en el procedimiento de ampliación y del acatamiento de las órdenes de la sentencia constitucional.
  8. Que se ordene la inscripción de la medida en los predios colindantes sobre los que se advierte en dicha providencia [sentencia T129 de 2011] posible acumulación de tierras, a saber (27006000400010312000, 27006000400010091000, 27006000300010084000, 27006000300010083000, entre otros).
  9. se ordene la suspensión del reconocimiento de Juntas de Acción Comunal o de cualquier otra forma político asociativa diferente al Cabildo Indígena dentro de las comunidades ancestrales, y se ordene al INCODER en liquidación y a la Agencia Nacional de Tierras, proteger salvaguardar y remitir al trámite del proceso con copia a la URT los expedientes completos sobre todos los trámites adelantados para la formalización de la propiedad colectiva de los dos resguardos, en aras de proteger el acervo probatorio necesario para culminar el proceso de caracterización de afectaciones de derechos territoriales actualmente suspendido y las demás que el Juez estime convenientes.<sup>1</sup>

**RELACIÓN FACTICA**

Como fundamento de la pretensión de medida cautelar preventiva aludida, la URT. DAE señala los hechos que se condensan a continuación:

---

<sup>1</sup> Véase folios 10 y 11 de la solicitud.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoestqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

1. Señala que los Resguardos indígenas de Chidima-Tolo y Pescadito, territorio colectivo del pueblo Emberá, está ubicado en el Municipio de Acandí, Departamento del Chocó. De acuerdo con las Resoluciones 005 y 007 del 20 de febrero de 2001, el Instituto Colombiano de Reforma agraria – INCORA, tituló CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE HECTÁREAS MÁS OCHO MIL SETECIENTOS METROS CUADRADOS (4.499Ha+8.700M2) al Resguardo Chidima Tolo en tres lotes discontinuos y DOSCIENTOS SETENTA HECTÁREAS MÁS CUATRO MIL METROS CUADRADOS (270 Ha +4.000M2) al Resguardo Pescadito.
2. Indica que el Resguardo Chidima, está formado por tres lotes discontinuos, teniendo como **Lote 1** a aquel que se encuentra en la parte más baja de la cuenca en el área más cercana al casco urbano de Acandí por la parte baja de la serranía; como **Lote 2** la zona intermedia del territorio ancestral y como **Lote 3** al globo que cubija la parte alta del Resguardo en la cabecera del Río Tolo, próximo al límite nacional con Panamá.
3. Indica que según múltiples peticiones de los líderes indígenas y las comunidades tendientes al saneamiento y ampliación de los resguardos, **el territorio ancestralmente ocupado debería englobarse en un solo predio**, de acuerdo con su uso, goce y costumbres, pues **la fragmentación por lotes discontinuos ha facilitado la invasión de colonos, presencia de actores armados ilegales y explotación de recursos naturales , trayendo consigo graves consecuencias ambientales, afectaciones y daños a sus derechos étnicos territoriales.**
4. En la Sentencia **T-129 de 2011**, la Corte Constitucional ordenó al INCODER adoptar las medidas efectivas para contribuir a la materialización de los derechos territoriales de las comunidades indígenas de Chidima Tolo y Pescadito, **particularmente la formalización de la propiedad colectiva sobre todo el territorio ancestral conformado un solo globo, una vez verificadas las condiciones para el reconocimiento estatal a través de un estudio socio económico y de tenencia de tierra.**
5. Que hasta la fecha, solo se conoce el Acuerdo 305 del 17 de abril de 2013 a través del cual esta entidad estableció la ampliación del Reguardo de Pescadito, sin que se conozca por parte de la UAEGRTD o de las autoridades indígenas el resultado del trámite administrativo para el Resguardo Chidima Tolo ni mucho menos, la viabilidad de englobar en un solo lote ambos resguardos, junto con la ampliación hacia su territorio ancestral no formalizado; a pesar de que el INCODER realizó múltiples visitas al territorio y



## Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Quibdó

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

pudo constatar la existencia de los presupuestos materiales para ello.

6. El equipo de profesionales de la UAEGRTD que está realizando la caracterización de afectaciones territoriales, delimitó un polígono unificado tomando como base la información primaria en campo (georreferenciación durante los recorridos y la cartografía social), ajustada con la base catastral del IGAC, cuya extensión es de **10.177 Ha + 1.215m<sup>2</sup>**.
7. Indican que adicionalmente, de acuerdo con la información catastral urbano/rural del municipio de Acandí, corresponde a la base de datos alfanumérica (registro 1 y 2) del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, se advierten 29 cédulas catastrales dentro del territorio étnico ancestral así:

CÉDULA CATASTRAL	MI	PROPIETARIO	NOMBRE PREDIO
270060003000100000000	180-20121	COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA KATIO	LOTE 3
70060003000010078000	180-20125	RESGUARDO INDIGENA PESCADITO	PESCADITO
270060003000100000000		LA NACION	BRISAS DEL TOLO
270060003000100000000		LA NACION	CHIDIMA
27006000300010061000		OSORIO RESTREPO JULIAN BAUTISTA	GRAN TOLO
27006000300010067000		RICARDO GANDIA FRANCISCO MANUEL	TOLO
2700600030001007600		LA NACION	BALDIO
27006000300010075000	180-11555	RODAS TANGARIFE ALBERTO ANTONIO	ESPERANZA
27006000300010074000		S/I	S/I
27006000300010057000	180-20121	RESGUARDO INDIGENA CHIDIMA TOLO	LOTE UNO
27006000300010057000		S/I	S/I
2700600030001006000	180-20121	RESGUARDO INDIGENA CHIDIMA TOLO	LOTE DOS
27006000300010073000		S/I	S/I
27006000300010072000		ROMERO SUAREZ MARIO	LOTE
27006000300010059000		RICARDO SAUL DE JESUS	LAGUNA
27006000300010054000		CUADRADO SIMANCA NICOLAS	PLANETA
27006000300010049000		PETRO CEBALLOS DENIS DANUS	PERDIDO
27006000300010066000		COMUNIDAD INDIGENA EMBERA KATIO	BALDIO
27006000300010058000		MARTINEZ HERNANDEZ MALFIRIS JUDITH	TOLO MEDIO

# República de Colombia



## Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Quibdó

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

27006000300010045000		S/I	S/I
27006000300010043000		S/I	S/I
27006000300010044000		S/I	S/I
27006000300010048000		PEREZ ROMERO ANGEL RAFAEL	RANCHO
27006000300010071000		RUIZ NEGRETE HUGO	MONTE CANELO
27006000300010068000		CHAVERRA CHALA JAIRO	CAMPO SANTO
27006000300010069000		RUIZ NEGRTE ROBERTO CARLOS	TOLEMAIDA
27006000300010070000		HOYOS BOHORQUEZ YANETH CONSUELO	RADAR
27006000300010063000		GONZALEZ LIBARDO	TERRON
27006000300010062000		ESTRADA PÉINADO EDUARDO	ARROZAL

8. Manifiestan que según información obtenida en campo, la Alcaldía Municipal de Acandí ha reconocido dentro del territorio ancestral de las comunidades indígenas de Chidima y Pescadito, juntas de Acciona Comunal – JAC conformadas por colonos, figuras político asociativas que riñen con el Cabildo y la organización Indígena y contravienen lo dispuesto en las sentencias T- 698 de 2011 y T 513 de 2012, al considerar que las JAC al interior de los territorios indígenas suponen una incompatibilidad con las funciones que cumplen las autoridades étnicas, una intromisión en la esfera del Gobierno propio y una vulneración al derecho a la autonomía territorial.

### PRUEBAS

Con la solicitud de medida cautelar se aportaron los siguientes elementos probatorios:

1. Acta de la reunión sostenida con los líderes indígenas el 12 de diciembre de 2015. Sobre el listado de asistencia. Sobre ello dicen que tiene RESERVA LEGAL DE CONFIDENCIALIDAD, por los testimonios rendidos por las comunidades, ya que estos ponen en riesgo su vida.
2. Informe de Riesgo de inminencia N° 012-15 de 17 de julio de 2015 Defensoría del Pueblo.
3. Resolución 007 del 20 de febrero del 2001 INCORA, por medio de la cual se constituyen los Resguardos Chidima Tolo y Pescadito.
4. Informe Técnico catastral de caracterización de afectaciones de derechos territoriales a las comunidades étnicas Resguardos Indígenas Pescadito y Chidima Tolo, con RESERVA LEGAL DE



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

CONFIDENCIALIDAD, por cuanto el mismo no ha sido validado por las comunidades indígenas en Asamblea.

5. Copia simple de la Resolución RZE No. 0224 del 23 de noviembre de 2015 " Por en la cual se suspende el trámite administrativo de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas forzosamente del territorio de los Resguardos Indígenas de Chidima y Pescadito ubicados en el Municipio de Acandí – Chocó".
6. Planos en formato PDF correspondientes a los mapas 1 y 2; así como los límites de los resguardos Chidima Tolo y Pescadito.
7. Sentencia T – 129 de 2011, Corte Constitucional.
8. Acta de la reunión de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T- 129 de 2011, Alcaldía de Acandí, 18 de noviembre de 2011.
9. Auto del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Quibdó respecto al incidente de desacato de la Sentencia T- 129 de 2011.
10. Acuerdo 305 de 2013, INCODER, por medio del cual se amplía el Resguardo de Pescadito.
11. Respuesta de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal que relaciona los resultados operativos de la Policía Nacional en el Municipio de Acandí, 07 de julio de 2015.

**TRÁMITE IMPARTIDO:**

Mediante auto interlocutorio 0203 del 27 de enero de 2015 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartado –Antioquia declaró la falta de competencia para el conocimiento de la presente cautela y ordenó la remisión a este Despacho.

En aplicación al artículo 152 del Decreto 4633 de 2011, fue admitida el 15 de febrero de 2016, en el cual se dispuso notificar al agente del MINISTERIO PÚBLICO, la cual, sólo se pudo cumplir el día 18 de febrero de 2016<sup>2</sup>, a través de la Procuradora 38 Judicial Primera Especializada en restitución de tierras de Medellín, quien intervino a través del informe que aparece obrante en la foliatura<sup>3</sup>, Así mismo se decretaron varias pruebas.

**INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO:**

Al contestar el traslado indicó la Agente del Ministerio público:

*"En el caso objeto de estudio la UAEGRTD solicita una serie de medidas preventivas, argumentando fundamentalmente que en el territorio de la comunidades de los Resguardos **CHIDIMA TOLO Y PESCADITO**, se estarían propiciando varias circunstancias que en su sentir, afectan la materialización de los Derechos Territoriales de la Comunidad.*

---

<sup>2</sup> Folio 24 al 26 y 34, 35

<sup>3</sup> Folios 154 al 162



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita -Quibdó -Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*Entre los aspectos que se resaltan como propios de la problemática estarían: la fragmentación del terreno que ha venido siendo ocupado ancestralmente por la Comunidad, la presencia de colonos con megaproyectos, presencia de actores armados ilegales, confinamiento, explotación de recursos naturales con sus graves consecuencias de deterioro ambiental, construcción de una carretera que atraviesa el Resguardo, minería ilegal, presencia de figuras político asociativa que riñen con el Cabildo y la organización Indígena.*

*Del análisis de la solicitud, resulta evidente la gravedad de la situación que se presenta fruto del conflicto armado en el lugar, lo cual se constituye en una gran amenaza para la población indígena de los resguardos, generadora de una difícil situación de desplazamiento por la petente de la medida cautelar, que ha sido debidamente documentado por la Unidad de Restitución de Tierras y que se relaciona en el material probatorio evidenciado en masacres, desplazamiento por la imposibilidad de movilizarse dentro de su territorio y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, que también pudo verse materializado por la explotación aparentemente irregular del subsuelo; enmarcándose todo ello dentro de las condiciones de urgencia y gravedad, facultando al Juez para una intervención como respuesta del Estado para evitar los graves perjuicios a que se encuentren sometido las Comunidades étnicas.*

*La presencia de colonos con sus megaproyectos, constituye una grave afectación para la propiedad colectiva de la Comunidad, ya que están en riesgo sus dinámicas culturales y sociales, pues al perder el control territorial, imperan las costumbres de los colonos.*

*Y es que no podemos dejar de lado todas las voces del artículo 7 de la Constitución Política que consagra: " ( ...) **El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana**", de donde nace la obligación del Estado de proteger jurídicamente los derechos de los grupos étnicos, para nuestro caso los derechos que tienen los resguardos **CHIDIMA TOLO Y PESCADITO**, por lo que en desarrollo de este precepto constitucional todas las autoridades están llamadas a proteger los derechos de las etnias, concebido como un derecho fundamental de las comunidades indígenas y por lo tanto un derecho de naturaleza colectiva. El mencionado derecho se materializa en la medida en que las comunidades que no ostentan los valores culturales y sociales de la sociedad mayoritaria puedan ejercer sus derechos fundamentales de acuerdo con su propia manera de ver el mundo. Ello implica que también los individuos que pertenecen a una comunidad indígena puedan expresarse y autodeterminarse de acuerdo con su cosmovisión cultural dentro y fuera de sus territorios.*

*Se tiene entonces, que el derecho a la identidad cultural se proyecta en dos dimensiones una colectiva y otra individual. La primera se trata de la protección constitucional que se otorga a la comunidad como sujeto de derechos y la segunda la protección que se le otorga al individuo para poder preservar el derecho de esa colectividad. Lo anterior comprende dos tipos de protección a la identidad cultural una directa que ampara a la comunidad como sujeto del derecho y otra indirecta que ampara al individuo para proteger la identidad de la comunidad. La protección a la identidad cultural de la comunidad como sujeto de derechos no*



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*supone que no se deban garantizar las manifestaciones individuales de dicha identidad ya que a protección del individuo puede ser necesaria para la materialización del derecho colectivo del pueblo indígena al cual pertenece. (...).*

*En el presente caso, es prudente retomar de que fue precisamente la Corte Constitucional quien mediante la sentencia T- 129 de 2011, se ocupó de la protección de lo Derechos vulnerados en la Comunidad y específicamente sobre aspectos tales como: Consulta Previa por la no realización de ésta antes del inicio de actividades con respecto a los tres proyectos objeto de tutela: la construcción de la vía Acandí Unguía, el proyecto de interconexión eléctrica de la empresa Interconexión Eléctrica S.A., y las actividades de prospección minera de la empresa Gold plata, así como también la necesidad de unificar en un solo globo de terreno los tres lotes del Resguardo Chidima Tolo; lo que soporta aún más la necesidad de adoptar medidas cautelares de carácter preventivo y así evitar un daño irremediable a la comunidad afectada.*

*Se torna necesario la medida igualmente, si se tiene en cuenta que por las grandes dificultades de orden público en la zona, ha sido sus pendido el trámite de caracterización y consecuentemente la imposibilidad de continuar con la etapa administrativa consagrada en el Decreto ley 4633 de 2011, para este tipo de procesos.*

*Basado en todo lo anterior, a criterio de esta Agencia del Ministerio Público es prudente acceder a la adopción de medidas cautelares que el Juez considere pertinentes, y que tiendan de manera provisional y preventiva a proteger la población indígena afectada, garantizando la seguridad en el territorio de quienes se encuentran en él y de quienes decidan retornar en condiciones de dignidad, voluntariedad y dignidad.*

*Como quiera que la medida cautelar en sí misma es de carácter provisional y preventivo, se insta a la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras, para que de forma concertada con la comunidad, y en el menor tiempo inicie las acciones procesales correspondientes para buscar del Señor Juez decisiones de fondo, tendientes a la materialización de los derechos y del restablecimiento de los que pudieran haber sido quebrantados”.*

**RESPUESTA A PRUEBAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO:**

Mediante auto 046 de 15 de febrero de 2016, se solicitó a las corporaciones judiciales: Tribunal Superior de Distrito judicial, Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional y a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de justicia, certificar respecto al cumplimiento de la sentencia T-129 de 2011; a la Agencia Nacional de Minería (ANM), respecto al estado de las solicitudes y licencias que se encuentren sobre el territorio de CHIDIMA-TOLO Y PESCADITO, o se traslapen con éste; a CODECHOCÓ, respecto a licencias ambientales otorgadas para intervenir con proyectos dentro del territorio, así como el estado de cumplimiento de la sentencia T-129 de 2011, y en este último sentido también a los





**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita -Quibdó -Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoessrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

Ministerios del Interior y de Justicia, de Educación Nacional, Protección social y Defensa, Dirección de Acción social (hoy Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas), a la Dirección del ICBF, y a la Dirección del Programa de Atención Integral contra las Minas Antipersonal. Así como a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, respecto al cumplimiento de las actividades de seguimiento a la sentencia T-129 de 2011. Respecto a tales órdenes sólo se tuvo las siguientes respuestas:

**Tribunal Superior de Distrito Judicial de Quibdó:**

Se allegó por parte de esta Corporación que dentro del expediente de tutela de OSCAR CARUPIA DOMICÓ y OTROS contra el MINISTERIO DEL INTERIOR y otros, radicada 2009-00075, no cursa incidente de desacato alguno, en razón del incumplimiento a las órdenes contenidas en la sentencia T-129 de 2011 proferida por la Corte Constitucional.

Así mismo se señala que el INCODER allegó a dicho expediente el acuerdo 305 del 17 de abril de 2013, en cumplimiento de la orden octava de la sentencia T-129 de 2011.

Así mismo, se puso a disposición de este Despacho del expediente en la secretaría de dicho tribunal, aun cuando al ser requerido se allegara al expediente ni cuando se solicitaron copias se pudo acceder al mismo.<sup>4</sup>

**Corporación Autónoma para el Desarrollo Regional del Chocó  
(CODECHOCÓ):**

Certifica dicha entidad que la misma no ha otorgado licencia ambiental alguna para intervenir con proyectos dentro del resguardo. Que respecto a la orden de la sentencia T-129 de 2011, dicha entidad ha dado cumplimiento a la misma, mediante resolución 0673 de 2012, en el cual se impone medida preventiva suspendiendo las actividades de prospección, exploración legal e ilegal o similares en materia minera que se esté llevando a cabo o se vayan a adelantar en las comunidades indígenas Emberakatío- Chidima-Tolo y Pescadito.

Allega así mismo el informe de seguimiento a la sentencia T-129 de 2011.

---

<sup>4</sup> Folios 119, 133, 134, 135, 137 del cuaderno principal.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

**Ministerio del Interior –Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y  
Minorías:**

Tras la realización de varias mesas de trabajo, relacionados con el plan de acción y plan de salvaguarda Embera, en aras de cumplir la orden Novena de la sentencia T-129 de 2011, se priorizaron las siguientes acciones:

Institución	Acción priorizada en el marco de la T-129 de 2011
ICBF	<b>Niños y adolescentes con discapacidad.</b> "Se trabajará con las autoridades emberá en territorio sobre información de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las comunidades priorizadas en la T-129 (Chidima, Tolo y Pescadito)"
	<b>Salud, recuperación nutricional y primera infancia.</b> "Acorde al compromiso de diciembre de 2015, el equipo emberá señala la focalización para niños en estado de desnutrición en comunidades emberá ktiio municipios de acandí y ungua, comunidades de Chidima, Tolo y Pescadito, Chocó"
MIN CULTURA	<b>Círculo de la palabra.</b> "tercer círculo de la palabra con la comunidad Dóvida. Se realizará en Acandí Chocó e incluirá a las comunidades Chidima, Tolo y Pescadito" en el marco de la Sentencia T-129 en junio 27 al 30"
UARIV	<b>Registro colectivo</b> "Se requiere unos criterios de priorización para los casos de registro colectivo. La UARIV sugirió unos criterios los cuales remitirá al equipo emberá para que sean analizados y complementados. Igualmente se acuerda como un primer momento de los criterios de priorización: Priorizar Acandí, Chidima, Tolo y Pescadito según la Sentencia T-129"

Así mismo allegó el cumplimiento de la orden de traducción de la sentencia T-129 de 2011.

**CONSIDERACIONES:**

**Competencia:**

El decreto ley 4633 de 2011 en su artículo 151 señala que en caso de urgencia o gravedad o cuando los derechos colectivos resulten vulnerados o amenazados, se podrá acudir ante el **Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de tierras**, para que decrete medidas cautelares.

Así mismo, desde el punto de vista del factor territorial, y para el proceso de restitución de tierras, el mismo decreto en el artículo 159 establece que "**Serán competentes los jueces y tribunales del lugar**



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

**donde se encuentre el territorio indígena** o aquellos itinerantes que sean asignados según se requiera. En el caso en que el territorio se encuentre en dos o más jurisdicciones será competente el del lugar donde se presente la demanda.” (Resaltado del Despacho).

De este modo, encontramos que de la armonización de estas dos disposiciones, se colige que este Despacho es competente para conocer del presente proceso cautelar, en razón de la naturaleza especial de este estrado judicial y del territorio colectivo sobre el cual se solicita la medida, el cual pertenece al Departamento del Chocó, lugar donde ejerce jurisdicción permanente este estrado judicial.

**Procedencia de la solicitud:**

Antes de abordar el fondo del asunto que se encuentra sometido a consideración de este despacho judicial se hace necesario abordar el marco normativo que permite la solicitud y el decreto de medidas cautelares de manera previa, sin la existencia de un proceso de restitución de derechos territoriales a favor de comunidades indígenas marcadas por el conflicto armado o que se haya realizado la focalización sobre la zona territorial que se pretende proteger<sup>5</sup>.

Para ello, acudimos al Decreto-ley 4633 de 2011, el cual establece Medidas de Atención, Reparación Integral y Restitución de Derechos Territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas; en su artículo 151 dispone:

*En caso de **gravedad o urgencia** o, cuando quiera que los derechos territoriales resulten **vulnerados o amenazados**, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o Defensoría del Pueblo, de oficio o a petición de parte, **solicitará al Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras la adopción preventiva de medidas cautelares para evitar daños inminentes o para cesar el que se estuviere causando sobre los derechos de las comunidades víctimas de pueblos indígenas y a sus territorios, ordenando:***

- 1. A las Oficinas de catastro el congelamiento del avalúo catastral de los predios de particulares que se encuentren en el territorio objeto de la solicitud de reparación y restitución.*
- 2. La Oficina de Catastro cumplirá la orden y remitirá al juez y a la Oficina de Registro correspondiente dentro de los cinco (5) días siguientes, la constancia de su cumplimiento. El Registrador, deberá inscribir la orden en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo y remitir al juez el*

---

<sup>5</sup> Véase art. 117 del Decreto 4633 de 2011.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*certificado sobre la situación jurídica del bien dentro de los siguientes cinco (5) días.*

- 3. Cuando el procedimiento abarque título de propiedad privada en el territorio indígena, se procederá a inscribir la solicitud de restitución en el folio de matrícula inmobiliaria respectiva. Tendrá los mismos efectos de la inscripción de demanda del Código de Procedimiento Civil.*
- 4. La suspensión de procesos judiciales de cualquier naturaleza que afecten territorios de comunidades indígenas objeto de protección o de las medidas cautelares.*
- 5. Suspensión de trámites de licenciamiento ambiental, hasta que quede ejecutoriada la sentencia de restitución.*
- 6. La solicitud de práctica de pruebas que estén en riesgo de desaparecer o perder su valor probatorio.*
- 7. Las demás que se soliciten o el juez considere necesarias, pertinentes y oportunas acordes con los objetivos señalados en este artículo, para lo cual se indicará los plazos de cumplimiento.”*

De lo demarcado se desprende que la presentación de la medida cautelar debe estar sujeta a unas condiciones de **gravedad, urgencia, vulneración o amenaza de los derechos territoriales**, y su finalidad sea evitar daños inminentes o cesar el que se estuviere causando sobre los derechos de las comunidades víctimas de pueblos indígenas y a sus territorios.

El artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que: *[e]n casos de extrema **gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas**, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.*

El primero hace referencia a la **gravedad** de los hechos, que suponga un detrimento sobre los derechos territoriales de la comunidad, y para las personas (moral, cultural, ancestral o material), de tal modo que haga evidente la impostergabilidad de la adopción preventiva de las medidas cautelares como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos territoriales de la comunidad, el cual tiene dentro del espectro del conflicto carácter constitucional y fundamental y por ende un valor altamente significativo para el desarrollo cultural, ancestral y material para la comunidad y las personas individualmente determinadas.<sup>6</sup>

La Corte Constitucional en la sentencia C-781 de 2012, manifestó:

---

<sup>6</sup> Cfr. Arts. 1, 2,3, 8 y 9 decreto ley 4635 de 2011; auto 005 de 2009.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita -Quibdó -Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoertqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*"Tal vez el conjunto más amplio de pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de protección de los derechos de las víctimas de hechos violentos ocurridos en el contexto del conflicto armado se encuentra en materia de protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno. En dichas decisiones, la Corte Constitucional ha examinado el contexto en el cual se produce la vulneración de los derechos de las víctimas y ha reconocido que se trata de víctimas del conflicto armado cuando los hechos acaecidos **guardan una relación de conexidad suficiente** con este. Desde esa perspectiva ha reconocido como hechos acaecidos en el marco del conflicto armado (i) los desplazamientos intraurbanos, (ii) **el confinamiento de la población**; (iii) la violencia sexual contra las mujeres; (iv) **la violencia generalizada**; (v) **las amenazas provenientes de actores armados desmovilizados**; (vi) las acciones legítimas del Estado; (vi) las actuaciones atípicas del Estado; (viii) los hechos atribuibles a bandas criminales; (ix) los hechos atribuibles a grupos armados no identificados, y (x) por grupos de seguridad privados, entre otros ejemplos. Si bien algunos de estos hechos también pueden ocurrir sin relación alguna con el conflicto armado, para determinar quiénes son víctimas por hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno, la jurisprudencia ha señalado que es necesario examinar en cada caso concreto si existe una relación cercana y suficiente con el conflicto armado interno."*

El segundo tiene como soporte a la solicitud la **urgencia** de la medida cautelar, entendida ésta como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio al territorio y la posible insuperabilidad del daño al mismo, de tal modo que se hacen necesarias las medidas. Y en tercer Lugar, **Cuando los derechos territoriales resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares**, evento que comporta dos aristas, la primera cuando por la acción o la omisión de una autoridad o un particular los derechos territoriales son efectivamente vulnerados; y el segundo cuando por la acción o la omisión de una autoridad o un particular los derechos territoriales son amenazados.

En la primera arista, parte de una consumación del daño a los derechos territoriales, pero que puede ser suspendida a través de las medidas cautelares de tal manera que se evite con ella la continuación de la vulneración y una irreparabilidad del daño causado al territorio como derecho fundamental de la comunidad. La segunda, comporta criterios tanto subjetivos como objetivos, que se configuran por el resultado de la acción o abstención de la autoridad o del particular sobre el ánimo de la persona o la colectividad presuntamente afectada. *Para que se determine entonces la hipótesis constitucional de la amenaza se requiere la confluencia de elementos subjetivos y objetivos o externos: el temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y la convalidación de dicha percepción mediante elementos objetivos*



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*externos, cuya significación es la que ofrecen las circunstancias temporales e históricas en que se desarrollan los hechos.*<sup>7</sup>

Permitiendo la norma, el decreto de medidas cautelares innominadas, basadas en criterios y principios de necesidad, pertinencia, oportunidad y finalidad; pues no otra cosa indica la norma cuando indica *Las demás que el juez considere necesarias, pertinentes y oportunas acorde con los objetivos de las medidas cautelares, para lo cual se indicarán los plazos de cumplimiento.*

**CARACTERÍSTICAS PARA LA PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES:**

***Situaciones aunadas, conexas o derivadas al conflicto armado interno, o a alguno de sus factores subyacentes o conexas:***

Ahora bien, por muy urgente que sea el tomar una medida de protección o prevención o muy graves que sean los hechos, no es cualquier amenaza o vulneración a los derechos territoriales la que activa la jurisdicción y el conocimiento del Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de tierras (Juez transicional constitucional). **Sólo lo harán aquellas situaciones graves y de atención urgente aunadas, conexas o derivadas al conflicto armado interno, o a alguno de sus factores subyacentes o conexas**, que amenacen o vulneren los derechos territoriales de una comunidad. Ello en razón, a que los derechos territoriales como derechos fundamentales amenazados o vulnerados por situaciones urgentes o graves generadas por hechos distintos del conflicto armado interno, tienen especial protección a través de las acciones ordinarias o constitucional ante el juez de tutela o por acciones de grupos o populares.<sup>8</sup>

Conforme con el decreto 4633 de 2011, no toda acción en contra del territorio propicia la protección por parte del Estado a través de la justicia transicional de restitución de tierras, sino sólo aquellas que vulneren o amenacen vulnerar el equilibrio, la armonía, la salud y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y que puedan estar ocasionados con el conflicto armado interno y sus factores subyacentes y vinculados.<sup>9</sup> Es decir, sólo si la afectación proviene como consecuencia de violaciones graves y manifiestas a normas internacionales de

---

<sup>7</sup> Corte Constitucional T-134 de 2010 M.P. Nilson Pinilla, y T-439 de julio 2 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

<sup>8</sup> Cfr. Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto Ley 4635 de 2011

<sup>9</sup> Art. 45 Dec. 4633 de 2011.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoestqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

derechos humanos, derechos fundamentales y colectivos, crímenes de lesa humanidad o infracciones al derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta la cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que une a los pueblos indígenas con la tierra, y que se encuentren enmarcadas dentro de la temporalidad que se señala en el decreto 4633 de 2011.<sup>10</sup>

En el mismo sentido, en el caso Jiguamiandó y Curvaradó la Corte interamericana se refirió a la adopción de medidas cautelares<sup>11</sup>, señalando que *En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino **fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. Las medidas se aplican siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y de prevención de daños irreparables a las personas. De esta manera, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo***<sup>12</sup>

**Actualidad de los hechos en que se fundan las pretensiones:**

Este Despacho ha relevado un criterio fundamental del objeto del proceso cautelar contemplado en los decretos leyes transicionales, respecto a la característica de los hechos que comportan la gravedad y urgencia, vulneración o amenaza a los derechos territoriales de la comunidad. De ahí que ha predique que los hechos sobre los cuales se sustenta la medida cautelar y se fundamenta cualquiera de estos elementos, deben gozar de **actualidad**.<sup>13,14</sup>

---

<sup>10</sup> Cfr. Art. 3º *Ibidem*.

<sup>11</sup> T-078 de 2013, *En relación con la fuerza vinculante de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, la jurisprudencia constitucional ha sido sólida y consistente en indicar que su carácter es obligatorio en el orden interno, en tanto (i) se trata de un órgano que hace parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que Colombia es uno de sus miembros; (ii) el Estado colombiano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional que en virtud de artículo 93 (inciso 1º) de la Constitución, hace parte del ordenamiento jurídico interno; y (iii) el Estatuto de la CIDH fue adoptado por la Asamblea General de la OEA, en la cual participa Colombia.*

<sup>12</sup> Resolución de levantamiento de medida provisional, de 22 de mayo de 2013, Cfr. *Caso del Periódico "La Nación"*. Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2001, Considerando cuarto, y *Asunto Castro Rodríguez*. Medidas Provisionales respecto de México. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13 de febrero de 2013, Considerando quinto.

<sup>13</sup> el artículo 34 del Decreto 4633 de 2011 cuando señala que "La interpretación y aplicación del presente decreto, se fundamentará en los principios y disposiciones contenidos en la Constitución, la Ley, la jurisprudencia y los tratados internacionales que resulten más favorables al restablecimiento y vigencia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas".



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoertqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

Concepto de actualidad que es entendido en su esfera de progresión temporal, puesto que un hecho puede haber acaecido años anteriores, pero se sigue manteniendo al momento de la imploración de la medida.

**Recae sobre derechos territoriales:**

Tal como lo ha sostenido este despacho en sus pronunciamientos, la finalidad del juzgador de restitución de tierras en sede cautelar, no es exclusivamente la protección de personas, sino la protección de los derechos territoriales, pues precisamente las medidas de protección y garantía de derechos territoriales ante situaciones graves y urgentes constituyen la respuesta Estatal a evitar los máximos perjuicios a los cuales se encuentra sometida la comunidad étnica, por lo que el poder de protección que ha sido colocado en sus manos, debe ser usado de manera racional, proporcional y ponderada según las realidades de cada caso. Partiendo siempre del riesgo en que se encuentra el derecho fundamental al territorio.

El derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes. Esta circunstancia es reconocida en convenios internacionales aprobados por el Congreso, donde se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. Adicionalmente, el Constituyente resaltó la importancia fundamental del derecho al territorio de las comunidades indígenas.

"Sin este derecho los anteriores (derechos a la identidad cultural y a la autonomía) son sólo reconocimientos formales. El grupo étnico requiere para sobrevivir del territorio en el cual está asentado, para desarrollar su cultura. Presupone el reconocimiento al derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales ocupados y los que configuran su hábitat".

De ahí que si bien es cierto, en variadas ocasiones se ha ordenado protección individual en la resolución de una medida cautelar, ello obedece a la necesidad de protección del territorio, del derecho territorial colectivo, a la protección de la comunidad como organización, autogobierno, pervivencia cultural, mítica conexo con la vida, la salud, dignidad del sujeto individual, todo por cuanto, el daño a dicho individuo causaría daño a la colectividad, bien por la falta de su líder, jefe etc.,

---

<sup>14</sup> Auto 050 de 6 de marzo de 2015 - Resolución Proceso de Medida cautelar a favor de la Comunidad de Pedeguita y Mancilla (rad. 27-001-3121-001-2014-00112 )—pese a que la misma fue revocada parcialmente por el Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, dicho aspecto no fue de ninguna manera rebatido por la providencia del superior en dicho caso.





## Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Quibdó

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

máxime cuando el debilitamiento de una colectividad está en muchos casos en los daños que le ocasionan a sus líderes. Así por ejemplo, en la medida cautelar del Alto Andágueda, si bien, se ordenó priorizar el retorno de las familias desplazadas en Bogotá y Risaralda pertenecientes al Resguardo del Río Andágueda, ello por cuanto, el desplazamiento rompe el cúmulo de relaciones creadas entre la tierra y la comunidad también se ordenó la protección de los voceros o reclamantes de los derechos territoriales, en el mismo sentido ocurrió en el caso afrodescendiente del Consejo comunitario de COCOMOPOCA.

El decreto 4633 de 2011, como se ha venido reiterando establece el territorio indígena como un derecho fundamental, puesto que el mismo constituye una integridad viviente y sustenta la identidad y armonía de los pueblos indígenas, creando lazos estrechos con él, constituyéndose el mismo en la base fundamental de su cultura, su vida espiritual, su integridad y desarrollo autónomo de sus planes de vida. Por lo que cuando resultan agentes que afecten dicho elemento el estado deberá orientar la protección hacia la comunidad en aras de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales, puesto que afectar el territorio es afectar la pervivencia física y cultural de todo el resguardo.

### **Minería y proyectos extractivos:**

De acuerdo con el 330 parágrafo *"La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades"*

Por su parte la ley 21 de 1991 que adopta el Convenio de la organización Internacional del trabajo, en su artículo 4. *"Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan"* asumiendo responsabilidades de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad<sup>15</sup>, de la relación con su

---

<sup>15</sup> Art. 2 y 3, ley 21 de 1991.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita -Quibdó -Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoertqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

territorio<sup>16</sup>, de tal manera que *"en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia."* *"Institu[yéndose] procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados."*<sup>17</sup>

Por su parte la H. Corte Constitucional en autos de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 que declara el Estado de cosas Inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado y riesgo de las comunidades indígenas *"ha señalado que las condiciones de violaciones graves y manifiestas de los derechos de los pueblos indígenas han facilitado que el conflicto armado produzca un impacto o afectación diferencial en estos grupos poblacionales de especial protección Constitucional"*<sup>18</sup>

**PERSECUSIÓN DE BANDAS CRIMINALES ORGANIZADAS DENTRO  
DEL TERRITORIO COLECTIVO:**

Quizá uno de los aspectos más complicados en el que el Estado debe buscar un punto de equilibrio se enmarca entre la efectividad de su política criminal y la protección efectiva de los derechos territoriales de las comunidades étnicas, cuando el ejercicio de la primera se realiza al interior o en límites del territorio colectivo.

Puesto que por un lado, se enfrenta a la obligación nacional e internacional de proteger la diversidad étnica y cultural mediante el reconocimiento del derecho a la igualdad y el establecimiento de la obligación de promover las condiciones para que dicha igualdad sea real y efectiva en términos de la situación de los grupos discriminados o marginados; y por el otro, en muchas de las ocasiones –debido a la presencia de grupos armados irregulares en los territorios- se ve compelido a usar su fuerza pública en defensa del Estado, la soberanía, la seguridad ciudadana colectiva e individual y la integridad del territorio. En obediencia al mandato, también constitucional, del inciso 2 del art. 217 de la Constitución Política Colombiana.

---

<sup>16</sup> Art. 13, ley 21 de 1991.

<sup>17</sup> Art. 14 num. 1o y 3o, íbidem

<sup>18</sup> Consideraciones decreto 4633 de 2011.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

No obstante, la Corte Constitucional de Colombia, en el Auto 004 de 2009, declaró que en términos generales, el conflicto armado y el desplazamiento forzado amenazan la existencia misma de numerosos pueblos indígenas colombianos, entre los cuales 34 fueron descritos como en situación de alto riesgo, entre los que se cuenta: (1) Wiwa, (2) Kankuamo, (3) Arhuaco, (4) Kogui, (5) Wayúu, (6) EmberaKatío, (7) Embera-Dobidá, (8) Embera-Chamí, (9) Wounaan, (10) Awá, (11) Nasa, (12) Pijao, (13) Koreguaje, (14) Kofán, (15) Siona, (16) Betoy, (17) Sikuani, (18) Nukak-Makú, (19) Guayabero, (20) U'wa, (21) Chimila, (22) Yukpa, (23) Kuna, (24) EperaraSiapidaara, (25) Guambiano, (26) Zenú, (27) Yanacona, (28) Kokonuko, (29) Totoró, (30) Huitoto, (31) Inga, (32) Kamentzá, (33) Kichwa, y (34) Kuiva.

En razón de ello, el artículo 60 del Decreto-Ley 4633 de 2011, Con el fin de proteger el carácter sagrado y ancestral de los territorios indígenas, la pervivencia física y cultural de los pueblos y comunidades, así como evitar el genocidio cultural y territorial, en el entendido que los daños ocasionados a los pueblos indígenas constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, establece las siguientes medidas de protección de los derechos territoriales, a cargo de la fuerza pública:

1. La Fuerza Pública, en el marco de las operaciones en DIH, deberá observar en todo momento los principios de protección, distinción, precaución, necesidad militar y proporcionalidad.
2. La Fuerza Pública deberá adoptar todas las precauciones en el ataque y en la defensa a fin de minimizar poner en riesgo a los pueblos y comunidades indígenas y a sus territorios.
3. Se deberá fortalecer la capacitación a los funcionarios públicos sobre las normas nacionales e internacionales relacionadas con los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
4. Los pueblos indígenas gozarán de protección especial contra los riesgos derivados de operaciones militares, así como medidas diferenciales de prevención de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos.

Precisamente en las normas del Derecho Internacional Humanitario consuetudinario, aplicables a los conflictos no internacionales, *"las partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas*



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita -Quibdó -Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*civiles y combatientes. Los ataques solo podrán dirigirse contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados".* Precepto que desde la Declaración de San Petersburgo, se establecía como *el objetivo legítimo* que debía tener las fuerza regular de todo Estado, esto es, *"el debilitamiento de las fuerzas militares del "enemigo""*. Mientras que el protocolo II, establece este mismo principio en el párrafo 2 del artículo 13.

Por su parte, también este mismo cuerpo normativo consuetudinario establece que *"las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Se tomarán todas las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causar incidentalmente."* Mientras que respecto a la proporcionalidad se establece la regla de que *"queda prohibido lanzar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista."* Ambos principios establecidos en relación con el principio de Humanidad<sup>19</sup> en el protocolo II y demás instrumentos internacionales. Entendiendo en todo caso como "ventaja militar", según el protocolo adicional I, *"la existencia de una expectativa de buena fe de que el ataque contribuiría de forma pertinente y proporcional al objetivo del ataque militar en cuestión."*

Finalmente, El DIH establece un delicado equilibrio entre las necesidades de la guerra y los condicionamientos humanitarios, de forma que no se deben causar al adversario males desproporcionados en relación con el objetivo del conflicto armado, que es vencer al enemigo. Supone optar por el mal menor para no causar a la parte adversa mayor violencia que la exigida por el desarrollo de las hostilidades.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> En los supuestos de duda se debe conceder prioridad a los intereses de las víctimas sobre otras necesidades derivadas del desarrollo del conflicto armado. Las normas de DIH han sido elaboradas para garantizar la protección de los que sufren las consecuencias de la guerra y deben ser interpretadas de la forma más favorable a la defensa de sus intereses.

<sup>20</sup> [http://www.cruzroja.es/portal/page?\\_pageid=878,12647079&\\_dad=portal30&\\_schema=PORTAL30](http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=878,12647079&_dad=portal30&_schema=PORTAL30)



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita -Quibdó -Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

**CASO CONCRETO:**

**DOBLE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL:**

Debido a que la presente solicitud de medida cautelar a favor del resguardo indígena de CHIDIMA-TOLO y PESCADITO, está referido a partir de la protección brindada por la H. Corte Constitucional, en sentencia T-129 de 2011, es necesario determinar si la protección que se busca en esta oportunidad es idéntica a la que ya el máximo ente constitucional propicio en la señala sentencia. Ello, por cuanto no se justificaría volver a estudiar de fondo un asunto que ya fue objeto de estudio en un recurso igual de efectivo, que el proceso de medida cautelar, teniendo en cuenta que la acción de tutela, en el marco de justicia constitucional, tiene a su favor una etapa de cumplimiento y desacato con sanciones que hacen posible la materialización del derecho.

**1. Protección a líderes de la comunidad, a la comunidad y procesos de fortalecimientos de creación de guardia indígena.**

De esta manera tenemos que dentro de las pretensiones de la solicitud de medida cautelar, se solicitó a favor de la comunidad de CHIDIMA - TOLO y PESCADITO:

- 1. Medida Cautelar consistente en el estudio inmediato y urgente de las condiciones de seguridad de los líderes y comunidades de los Resguardos Indígenas Chidima Tolo y Pescadito.*
- 2. Se adopten procesos de fortalecimiento y dotación para la creación de la guardia indígena para los Resguardos asociados al Cabildo Mayor Indígena del Darién Chocoano-CAMIDACH.*

En torno a esta pretensión, tenemos que la sentencia T-129 de 2011 decretó:

**NOVENO: ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia** que, en el término máximo de dos (2) meses contados a partir de la presente providencia, con la participación de las autoridades mencionadas en el Auto 004 de 2009, es decir, de la Dirección de Acción Social, de la Dirección del ICBF, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Protección Social, **del Ministerio de Defensa y de la Dirección del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal**, PRIORICEN en el Plan de salvaguarda étnica de los pueblos identificados en la presente providencia los mecanismos de protección adecuados y efectivos que garanticen la



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoertqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*pervivencia de las comunidades. En el cumplimiento de esta orden deberán tener participación efectiva las autoridades de los pueblos indígenas enunciados.*

*De la misma forma, en dicho proceso se deberá contar con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, y podrá contarse con el de organismos no gubernamentales cuyos mandatos estén orientados a prevenir y proteger los derechos de las comunidades étnicas de la Nación.*

Para la adopción de tal orden, la Corte, tuvo en cuenta los aspectos que a continuación se citan:

*(...) **El liderazgo indígena** – En los informes se considera que el liderazgo del Gobernador Mayor de Chidima es débil, dado el nivel de desobediencia dentro de la comunidad. Al parecer hay dos grupos informales de liderazgo dentro de la comunidad que son más activos que el Gobernador en términos de movilización comunitaria. Existe algún nivel de tensión entre los dos grupos que puede debilitar la capacidad de la comunidad de estar unida frente los riesgos que hay y facilitar la cooptación de uno de los grupos por parte de los intereses en juego (económicos y de otro tipo). Las tensiones y amenazas también aumentan por las relaciones de algunos líderes con organizaciones sociales y de derechos humanos como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que aumentan posibilidad de más amenazas por parte de las AGC.*

*Existe un **alto riesgo a la seguridad de los líderes de Chidima**, por la posible confluencia entre los intereses económicos y las presiones de las AGC con graves consecuencias para la comunidad, que pueden debilitar la autonomía y la unidad indígena en esta comunidad y en el caso extremo la fractura política y social, de la misma y la dispersión física de la comunidad.”*

*Conforme a la información trascrita la Sala encuentra necesario implementar como medida urgente de protección que se avance de forma prioritaria en el Plan de Salvaguarda ordenado por la Corte Constitucional en el **Auto 004 de 2009**, en el que se declaró que el Estado colombiano está en la obligación doble de prevenir las causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, y atender a la población indígena desplazada con el enfoque diferencial que para ello se requiere.*

*Para ello se ordenó el diseño e implementación del Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados Por el Desplazamiento (Incluido el Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Embera), en el cual reposa el cronograma para su implementación y seguimiento, y los componentes de prevención y atención, así como el respeto de los criterios*



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita -Quibdó -Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*de racionalidad constitucional en las políticas públicas de diversidad  
etnocultural.*

Tal como se vislumbra en la orden de la Corte y en el aparte de sus consideraciones, la protección solicitada por la actora en la medida cautelar, respecto a los líderes de la comunidad y para los procesos de fortalecimiento para la creación de una guardia indígena en el territorio, está cubierta por la orden novena de la sentencia T-129 de 2011, toda vez que en la misma se ordena a una serie de instituciones entre ellas el ministerio de defensa y ministerio del interior **PRIORIZAR en el Plan de salvaguarda étnica de los pueblos identificados en la presente providencia los mecanismos de protección adecuados y efectivos que garanticen la pervivencia de las comunidades.**

Ello por tanto comporta estudios de seguridad de los líderes y de la comunidad en general, así como el fortalecimiento de los procesos de creación de la guardia indígena, de ahí que si a la fecha no se ha resuelto la situación de la formación de dicho plan, ello obedece a una actitud negligente de las instituciones encargadas e incluso de las mismas instituciones acompañantes y vigilantes del cumplimiento de la medida, como garantes de los derechos territoriales de la comunidad, tal es el caso de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

Se evidencia el paquidérmico seguimiento que a dichas orden han realizado las instituciones de apoyo, acompañamiento y vigilancia, puesto que del escrito allegado el día 18 de abril de 2016 por parte de la procuraduría, se evidencia cómo pese a haber obtenido respuesta por parte del ministerio de Defensa Nacional y de las demás instituciones desde el pasado 30 de mayo de 2012, no han realizado otro seguimiento, pese a que el Ministerio de Defensa, la información que les brindara fuera de que *"estaba pendiente la convocatoria del Mininterior, para la discusión de la ruta metodológica del plan de salvaguarda"*. De la defensoría, más allá de los informes sobre la grave situación que se vive en el territorio, no allegó ninguna actividad de seguimiento para la materialización de las órdenes.

Evidente resulta que dichas instituciones de seguimiento e inclusive las mismas autoridades, no hayan elevado su voz de protesta ante el continuo incumplimiento de las órdenes constitucionales. Estando las primeras legitimadas y obligadas a la protección y garantía de los derechos de la comunidad de CHIDIMA TOLO Y PESCADITO. Es que no en vano, la sentencia en el decreto **decimosexto ORDENA a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*[Que] por medio de sus áreas respectivas, que apoyen, acompañen y vigilen el pleno cumplimiento del presente fallo, con el fin de garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos y órdenes adoptadas. Por Secretaría General, ofíciase a las referidas entidades para que coordinen y creen la comisión pertinente para tal fin.*

Es decir, no sólo las instituciones ordenadas han incumplido los decretos de la Corte, sino también la defensoría y Procuraduría, han dejado a un lado las funciones de apoyo, acompañamiento y vigilancia impuestas por el Máximo tribunal, dejando al garete la materialización de los derechos fundamentales de la comunidad de Chidima-Tolo y Pescadito.

Como se evidencia, no se trata de una situación de falta de efectividad del medio judicial utilizado, es precisamente la falta de voluntad institucional la que ha contribuido que desesperadamente la Unidad de Restitución de Tierras pretenda una nueva protección en torno a este punto, cuando tiene a su alcance la Protección de la máxima autoridad judicial y constitucional del Estado.

Nótese como, siendo el incidente de desacato una de las herramientas disciplinarias a la mano de las instituciones y de la comunidad ha dejado de ser utilizando, siendo que el mismo cumple todos los elementos para ser un recurso judicial efectivo ajustado a la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos humanos, puesto que es idóneo, sencillo y rápido<sup>21</sup>, del cual la Corte Constitucional ha señalado:

*El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 no fija un término determinado o determinable para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela, lo que, tratándose de un elemento esencial para armonizar con la Constitución implica la existencia de una omisión legislativa relativa. Al regular la Constitución la acción de tutela, en su artículo 86, y precisar que tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser inmediatos, y disponer que dicha inmediatez no debe superar los diez días, de este mandato se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela no habrán de transcurrir más de diez días, contados desde su apertura. En casos excepcionales, (i) por razones de necesidad de la prueba y para asegurar el derecho de defensa de la persona contra la cual se promueve el incidente de desacato, (ii) cuando exista una justificación objetiva y razonable*

---

<sup>21</sup> Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párrafo 92; Corte I.D.H., Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 52; casos de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awás Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 111; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), y en la Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 23, *Casos Durand y Ugarte*. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párrafo 102; *Cantoral Benavides*. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párrafo 164; *Ivcher Bronstein*. Sentencia de 6 de febrero de 2001, entre otros





**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita -Quibdó -Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*para la demora en su práctica y (iii) se haga explícita esta justificación en una providencia judicial, el juez puede exceder el término del artículo 86 de la Constitución, pero en todo caso estará obligado a (i) adoptar directamente las medidas necesarias para la práctica de dicha prueba respetando el derecho de defensa y (ii) a analizar y valorar esta prueba una vez se haya practicado y a resolver el trámite incidental en un término que sea razonable frente a la inmediatez prevista en el referido artículo.<sup>22</sup>*

Por tanto, resultaría inane para este despacho resolver sobre los ítems uno y dos de la pretensión primera de la solicitud, si no observara, que si bien en principio resulta idónea la acción incidental para conseguir la materialización de las órdenes de protección de derechos fundamentales, en el caso concreto, desde el aspecto empírico, -y dada la naturaleza, gravedad y urgencia de la petición, el incidente carece de potencia para *obtener el resultado para el que fue concebido, en el menor término posible*, si tenemos en cuenta que la realización de un plan de salvaguarda, el cual contendría los mecanismos de protección para los líderes y la comunidad debe surtir el proceso de concertación y consulta previa con la comunidad, por lo que sería someter a los líderes al tiempo en que dicha consulta se surta. En el sentido aquí expuesto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sostenido:

***No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial.***<sup>23</sup> (Resalta el Despacho).

Sumado a ello, tenemos factores que podría imposibilitar la realización de una consulta previa, con libertad, puesto que se evidencia de varios documentos la manera creciente del conflicto armado interno en la zona en la que incluso existen acuerdos entre fuerzas irregulares del Estado, ejerciendo presiones y amenazas sobre la comunidad indígena. Fuerzas que incluso, ha llevado a la URT a suspender el proceso de caracterización en el territorio, impidiendo a la el proceso de inscripción del predio en el registro de tierras despojas y Abandonadas. Resultando por tanto que la situación actual de violencia, impone la necesidad de adoptar medidas de protección a favor de los líderes que preserven su integridad física, integridad cultural de la comunidad y fortalezca el

---

<sup>22</sup> T- 367 DE 2014.

<sup>23</sup> Cfr. Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrafo 137; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párrafo 24, entre otros.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoesrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

gobierno propio al interior del territorio, el cual se ha visto afectado también por las acciones del conflicto y sus factores. Tal como se evidencia de un extracto de la declaración de los líderes de la comunidad:

*"Ustedes mismos vieron los grupos, al mismo tiempo entraron ellos, de ahí para acá han apretado más porque hasta la fecha ya no podemos andar como andábamos antes una parte prohibieron para arriba de allá a las 6pm de adelante ya no se puede caminar para arriba [Desde la comunidad de Chidima, Lote 1 del Resguardo] ellos manifiestan que desde las 6pm si nos ven por ahí no nos responden. Ahora no andamos ninguna parte, ni siquiera salimos pa' pesca y menos cacería. Nos quedamos ahí, ahí en confinamiento, en estos momentos."*

(...)

*"No son bombardeos, son ráfagas de fusil y granadas, no es Fuerza Aérea. No sabemos si es por hacer la bulla o son combates, pero pasó antes de ayer. Por medio de eso tenemos temor, por medio de eso no salimos a ninguna parte los indígenas. Estamos ahí en confinamiento."*

A de aclararse que la medida aquí adoptada como mecanismos urgente de protección, no relieves el cumplimiento de las orden novena de la sentencia T-129 de 2011 emitida por la Corte Constitucional.

## **2. Desminado humanitario:**

Pese a que el ítem tercero de la pretensión primera, se hace referencia a la adopción de un programa de desminado humanitario, lo cierto es que en el expediente sólo se cuenta con el testimonio de la comunidad que sospecha de la existencia de minas antipersona en *"la parte alta de las montañas"* lo que les impide buscar comida en esa zona, teniendo que buscarla en un lugar cercano.

Sin embargo, se puede notar que a pesar de que la orden novena de la sentencia T-129 de 2011, incluye a la ***Dirección del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal***, no existe en la sentencia, fundamento alguno respecto a la existencia de minas antipersona en el territorio.

Por su parte en el acápite de **"contextualización y caracterización del riesgo"**, del informe de Sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, se lee:

*"Tanto las FARC-ep como las AGC han establecido dispositivos de control poblacional y territorial, con el despliegue de estructuras armadas en zonas rurales y corregimientos, lo cual permite prever la persistencia y agudización del riesgo para la población civil, tangible en*



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoertqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*la ocurrencia de amenazas, homicidios en persona protegida, intimidaciones, desplazamientos forzados y confinamientos **no necesariamente derivados** de las confrontaciones directas entre actores armados, desapariciones forzadas, actos de violencia sexual y reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes y accidentes **por minas antipersonal o artefactos explosivos improvisados.***” (Resalta el Despacho).

Así mismo, en memorial allegado como seguimiento a las órdenes de la sentencia T-129 de 2011, por parte de la Procuraduría, se evidencia que desde el pasado 13 de junio de 2012, no ha existido necesidad de intervención al respecto en el territorio, debido a que nunca se han presentado incidentes en ACANDÍ, no existe reporte de accidentes de víctimas indígenas, y no existe este riesgo para el resguardo.

Ahora bien, tal como se indicó al inicio, la orden novena, incluye para el plan de salvaguarda la determinación del desminado, el cual deberá ser concertado con la comunidad, de tal manera, que la situación además de estar protegida – a diferencia de la seguridad de los líderes- por su característica, puede ser materializada en el curso del Incidente de Desacato que podrá elevar incluso la misma Unidad de Restitución a favor de la Comunidad. Pues no pretende este despacho como se ha sostenido en esta providencia, suplantar las funciones constitucionales protegidas por el máximo tribunal, sino sólo aquellas en la que del estudio resulte que el recurso judicial efectivo de desacato no tiene el potencial para conseguir de manera inmediata la materialización de las órdenes.

De este modo, encontrándose ya protegida la situación, y resultando claramente efectivo el incidente de desacato para su materialización, este despacho se abstendrá de resolver sobre la misma.

**3. Estrategia integral para combatir la minería ilegal en el territorio colectivo**

*(...) la implementación de una estrategia integral para combatir la problemática de la extracción ilegal de minerales que actualmente se realiza en la zona de afluencia de la quebrada Reynaldo y otros.*

Evidentemente, una de las solicitudes en la solicitud de amparo constitucional ante la Corte Constitucional y que arrojó la sentencia T-129 de 2011, fue precisamente la de suspensión de la minería<sup>24</sup>. Lo que permitió que en dicho trámite se vinculara a INGEOMINAS, entidad que en su momento era la encargada de cumplir las funciones de

---

<sup>24</sup> Sentencia T-129 de 2011, Folio 13, petición VIII.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

licenciamiento minero. Intervención que permitió identificar que en su momento la empresa MINERALES DEL DARIEN S.A., era propietaria de títulos o concesiones mineras que se encontraban en el territorio.<sup>25</sup>

De este modo, y tras realizar un análisis del impacto que las actividades extractivas ocasionan en el predio, reseño la necesidad *de adoptar medidas que contribuyan a la efectividad de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas en general. Para ello, la Corte encuentra necesario disminuir urgentemente el impacto desproporcionado que las distintas medidas administrativas que autorizan explotación de recursos y obras de infraestructura tienen sobre las riquezas culturales y naturales de la Nación*”, **DECRETANDO EN LA ORDEN SEPTIMA** a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia, a INGEOMINAS, a la Corporación Autónoma Regional del Chocó (CODECHOCÓ) y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:

***SUSPENDER todas las actividades de prospección, exploración legal e ilegal o similares en materia minera que se estén llevando a cabo o se vayan a adelantar, en desarrollo de contratos de concesión con cualquier persona que tenga la potencialidad de afectar por este aspecto a las comunidades indígenas Embera Katío Chidima Tolo y Pescadito, hasta tanto se agote el proceso de consulta previa y la búsqueda del consentimiento informado de las comunidades étnicas implicadas, en los términos y subreglas fijadas en esta providencia.***

Del estudio de la sentencia de la Corte, y de la orden emitida, cierto es que el objeto perseguido en la solicitud elevada por la URT, es diametralmente distinto a la situación que en 2011 dio tratamiento el alto tribunal, puesto que la orden de tutela está orientada a aquellas actividades mineras de explotación, exploración o prospección que se realizan *en desarrollo de los contratos de concesión con cualquier persona*; dejando de lado las actividades extractivas que sin estar ceñidas a ninguna forma contractual o licenciamiento se realizan en el territorio ancestral; perspectiva que es objeto de estudio en este trámite cautelar.

Del oficio S-2015-017548 de 5 de julio de 2015, suscrito por el COMANDANTE de la Unidad Nacional contra la Minería ilegal y el Terrorismo, se evidencia además de las actividades mineras existente en el municipio de Acandí, también el trabajo que las autoridades encargadas se encuentran realizando en el municipio chocoano. Trabajo que ha arrojado capturas, destrucción de maquinarias, entre otros.

Sin embargo, del plenario emerge prueba de la grave situación por parte de los grupos armados ilegales que operan en la zona, así por ejemplo

---

<sup>25</sup> Ibídem, folio 38.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

en comunicación de la Defensoría del Pueblo, dirigida al Alcalde municipal de Unguía se advierte que:

*El frente 57 de las FARC-EP y el grupo armado ilegal post desmovilización de las AUC conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC- o Urabeños, pretenden imponer a través de la violencia el tránsito por el territorio del mencionado resguardo de personas, semovientes, maquinaria y miembros de esa agrupación ilegal hacia la zona de frontera con Panamá, mediante amenazas en contra de las autoridades tradicionales del pueblo Embera Katío del Resguardo Chidima-Tolo, lo que expone a la comunidad al riesgo de desplazamiento forzado y a sus líderes, al riesgo de sufrir atentados contra la vida e integridad personal.*

(...)

*Sin embargo, a pesar de lo ordenado por la Corte Constitucional, los actores armados ilegales han instigado a grupos de familias indígenas habitantes del Resguardo Chidima Tolo, para que negocien directamente con ellos el paso de retroexcavadoras hacia zonas de explotación ilegal de minería, así como de personas y animales hacia la frontera. Han promovido la invasión ilegal del territorio y la colonización que trae consigo la siembra y el cultivo de la coca.*

Situación que demuestra, fehacientemente la vinculación de las actividades extractivas ilegales, con el conflicto armado, demandando por tanto una respuesta más recia por parte de las autoridades encargadas. Por lo que se accederá a dicha pretensión, entendiendo además que las afectaciones en razón de dicho fenómenos van más allá de la simple destrucción de las maquinarias, pasando por los compromisos institucionales que en razón de dicho fenómeno tengan los representantes legales de los municipios y las demás autoridades militares en el control del acceso de las maquinarias en la zona y de la fiscalía general de la Nación, en la investigación priorizada para identificar, juzgar y condenar a los responsables de las amenazas y demás delitos contra las autoridades étnicas y las comunidades de los resguardos Chidima Tolo y Pescadito.

**4. Presencia de la Fuerza Pública en el territorio:**

*En el marco de los operativos de la Fuerza Pública contra el Clan Úsuga: Que se abstengan de levantar campamentos o puestos de mando en áreas del territorio ancestral de las comunidades del Resguardo.*

Evidentemente de las pruebas se extrae cómo los grupos armados ilegales que delinquen en la zona y que se encuentran dentro del territorio colectivo, imponen medidas de control territorial y poblacional, control de corredores de movilidad, se les obliga a no realizar actividades



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita -Quibdó -Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

agrícolas y pesquera en zonas donde se encuentran cultivos de uso ilícito y actividades extractivas ilegales, se les prohíbe la realización de actividades tradicionales; sometiéndolos a otra de las expresiones de la crisis humanitaria producto de la confrontación armada: el confinamiento, que tiene efectos negativos de mayor impacto en la población indígena, pues con estas acciones se afectan gravemente sus pautas culturales tradicionales, sus relaciones socioeconómicas y con su entorno, lo cual pone en peligro la existencia misma de las comunidades y personas que las integran. Panorama que se torna aún más difícil tratándose de pueblos de tradición nómada y seminómada. De dicho panorama tenemos que el departamento del Chocó, fue uno de los afectados con el denominado paro "Armado de las AGC", el pasado 31 de marzo y 1 de abril de 2016.

Legalmente la simple presencia de las Fuerzas militares dentro del territorio *persé*, no constituye una afectación, incluso, de las obligaciones impuestas por el mismo decreto 4633 de 2011 en su artículo 60, se extrae que de suyo, la fuerza pública puede estar presente dentro del territorio, con observancia en todo momento de los principios de *protección, distinción, precaución, necesidad militar y proporcionalidad a fin de minimizar poner en riesgo a los pueblos y comunidades indígenas y a sus territorios*.

Así mismo, teniendo presente que "Los pueblos indígenas gozarán de protección especial contra los riesgos derivados de operaciones militares", así como medidas diferenciales de prevención de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos."

Tal como se vislumbra, las obligaciones de la fuerza pública se encuentran establecidas en el mismo decreto, y con la solicitud no se demuestra que la utilización de campamentos o puestos de control en ejercicio de la función constitucional persecutora de los grupos armados ilegales, a fin de preservar la soberanía e integridad territorial, afecte en los términos establecidos en el decreto los derechos territoriales de la Comunidad Indígena de Chidima-Tolo y Pescadito.

No existe, dentro del dossier demostración alguna de que este hecho esté derivando riesgos para la comunidad, o que dicho actuar de las fuerzas militares desconozca los principios de proporcionalidad, distinción, precaución y necesidad militar.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

Es inentendible, que en una comunidad de la que se denuncia prohibiciones y amenazas de las FARC-EP, de las AGC y de colonos en la región, y un actualmente confinamiento de la comunidad, se pretenda desmilitarizar el territorio, e impedir que, la función constitucional de la Fuerza Pública se ejerza. La cual se reitera, no debe tener ningún punto territorial nacional vedado, y que está obligada en tratándose de territorios colectivos a garantizar –en ejecución de sus funciones- la observancia de los principios ya anunciados arriba, y que se encuentran establecidos como estándares internacionales y reglas de los conflictos internacionales y no internacionales, como se explicó en la parte considerativa de esta decisión.

Tal como se ha venido sosteniendo los problemas que rodean al resguardo de Chidima-Tolo y Pescadito, no se solucionan con la simple intervención militar del Estado dentro del territorio, ello apenas es uno de los elementos con los que se contribuye a la normalización del orden público –alterado por el conflicto- y por tanto se requiere una intervención integral de todos los entes territoriales, quienes se han sustraído de cumplir las órdenes en la sentencia T-129 de 2011.

**5. Atención Humanitaria y asistencia alimentaria:**

*Se brinde con carácter de urgencia atención humanitaria y asistencia alimentaria a las comunidades indígenas mencionados, ello con enfoque étnico diferencial concertado con las comunidades.*

La situación ya descrita a lo largo de este auto ha ocasionado que las familias, no puedan realizar sus actividades agrícolas y pesqueras, puesto que el confinamiento al cual ha sido sometida impide puedan abastecerse con facilidad al interior del territorio, del cual procede su asistencia alimentaria.

Por ello, el sustento de la presente pretensión deviene de lo dicho en la presente providencia, que permite que sea ordenado a las instituciones respectivas la atención humanitaria y alimentaria de la comunidad de Chidima Tolo y pescadito.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

**6. Inscripción de la medida en predios:**

*Que se ordene la inscripción de la medida en los 29 predios identificados en el acápite de identificación del territorio sobre los cuales hay pretensión de unificación, en aras de proteger el territorio ancestral ante la dilación injustificada en el procedimiento de ampliación y del acatamiento de las órdenes de la sentencia constitucional.*

La Corte en la sentencia T-129 de 2011, encontró de las pruebas relacionadas que la omisión del Estado a través de los distintos entes encargados de velar por la integridad no sólo de las comunidades étnicas implicadas sino de la protección del medio ambiente es evidente. Dichas circunstancias están abiertamente relacionadas con presencia de grupos armados y presencia de colonos en tierras baldías, entre otros factores. En virtud de lo referido, la Sala encuentra necesario que se asuma de forma pronta y razonable la solución integral de la problemática referida. Ordenando al Incoder en dicha sentencia que

*Dentro de los (8) días siguientes a la notificación de la presente providencia y en el término de 120 días (tiempo que encuentra sustento en los artículos 10 a 14 del Decreto 2164 de 1995), expida una resolución adecuadamente motivada en la que se determine si hay lugar o no al englobe o ampliación de los resguardos Pescadito y Chidima. En dicho estudio se deberán contemplar las recomendaciones, razones y pruebas expuestas en esta providencia, sumadas a las que necesariamente serán oficiadas por la entidad y allegadas al proceso. De incumplir esta orden, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER– incurrirá en la conducta prevista por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.<sup>26</sup>*

---

<sup>26</sup> En la Sentencia T-188 de 1993, esta Corporación ya había dado una orden de este tipo ante la problemática presentada por miembros de la comunidad indígena Paso Ancho, asentada en la Vereda de Chicumbe, Municipio de Ortega, Departamento del Tolima, los cuales solicitaron que en un breve plazo se realizaran estudios socio-económicos y jurídicos tendientes a constituir sendos resguardos sobre el predio Chicumbe, ocupado por las comunidades de Paso Ancho y San Antonio, de manera que la mitad del área se destinase a los naturales de Paso Ancho. Los peticionarios sostenían que la omisión de la autoridad pública además de desconocer la ley en lo atinente a la constitución de resguardos, contribuía a la violación y amenaza de los derechos a la propiedad y a la vida de los integrantes de su comunidad ante la arremetida del grupo de San Antonio que a fuerza de amenazas pretendía desalojarlos del territorio.

En dicho caso la Corte ordenó: “**CONCEDER** la tutela solicitada y, en consecuencia, **ORDENAR** al Gerente Regional del Instituto de Reforma Agraria, INCORA, seccional Tolima, la realización de los estudios socioeconómicos y jurídicos tendientes a la constitución de uno o varios resguardos sobre el predio CHICUAMBE en la jurisdicción de Ortega, Tolima, dentro de los estrictos y precisos términos establecidos en la ley, el cual fuera entregado materialmente al Cabildo de la Comunidad de Paso Ancho.”





**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoertqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

El Incoder en cumplimiento de la Orden constitucional emitió el acuerdo 305 de 17 de abril de 2013, a través del cual estableció encontró posible la ampliación del Resguardo Indígena de Pescadito de la etnia Dobida, con dos Globos de terrenos Baldíos de la Nación, en jurisdicción del municipio de Acandí, Departamento del Chocó. Lo que evidencia, que existe a la fecha un cumplimiento parcial de la orden de la Corte, puesto que entre las opciones de englobar o ampliar los resguardos, eligió la ampliación de Pescadito; restándole por **determinar si hay lugar o no al englobe o la ampliación de Chidima**.

Ahora bien, a pesar de que la orden de la Corte es un estudio de factibilidad, puesto que la misma no ordena de manera directa **englobar o ampliar**, sino “**determinar si hay o no lugar a...**”, resulta claro para este despacho que el silencio respecto al Resguardo de Chidima-Tolo, ha perpetuado el conflicto con múltiples colonos que se ubicaron en los terrenos baldíos, quienes de acuerdo con declaraciones de miembros de la comunidad reseñadas por la Unidad, ejercen al igual que los grupos armados ilegales presión para que permitan la realización de la Carretera denominada *Unguá- Acandí ó Titumate- Balboa- San Miguel- Acandí, en el sector K26-00 al K34-700 en el municipio de Acandí, en lo relacionado con el territorio de las comunidades de los Pueblos Embera Katío y Dobidá de los Resguardos de Pescadito y Chidima*. Proyecto que fue suspendido por la sentencia T-129 de 2011, “*hasta tanto se agote el proceso de consulta previa y la búsqueda del consentimiento informado de las comunidades étnicas implicadas, en los términos y subreglas fijadas en esta providencia.*”

Situación, que pone en riesgo los derechos territoriales de la comunidad y afecta su libertad de decisión, al tratar de imponérseles un proyecto que tal como se reseñó ante la Corte, causaría daños a la comunidad, pues habría más presencia de colonos y grupos dentro de la comunidad.

Sin embargo, tal pretensión de la Unidad está fundada sólo en el querer de ampliación de la comunidad respecto varios de los territorios que la URT – a su juicio engloba en uno sólo- dejando 29 de ellos, a los que considera debe ampliarse el resguardo de Chidima-Tolo para luego englobarse con el Resguardo de Pescadito. No se muestra sin embargo, que el interés de la Unidad sea el de restituir a favor de esa comunidad dichos predios, no se cuestiona siquiera, más allá de la llegada de colonos a territorios baldíos, la propiedad que dice la Unidad ejercen estos colonos.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

Inclusive, la misma sentencia T-129 de 2011, reseña a los colonos como personas que llegaron a terrenos baldíos, más no a tierras del resguardo. Tanto así que, para fulminar dicha situación emite la orden ya explicada en el este acápite. Si bien el juez de restitución puede adoptar medidas cautelares innominadas dentro de este proceso, ellas tienen que ser **NECESARIAS, PERTINENTES y OPORTUNAS** acordes con los objetivos señalados en el artículo 151 del decreto 4633 de 2011, el cual no es otro que **evitar daños inminentes o para cesar el que se estuviere causando sobre los derechos de las las comunidades víctimas de pueblos indígenas y a sus territorios.**

Pues, nótese como la corte al referirse a éste punto y al emitir la orden reseñó: ***En virtud de lo referido, la Sala encuentra necesario que se asuma de forma pronta y razonable la solución integral de la problemática referida.***

Por eso, si una afectación existe no es precisamente la inscripción de una medida en los predios privados que va a solucionarla o que tendría la virtualidad de evitar el daño o hacerlo cesar. Es el incumplimiento por parte de INCODER de la orden emitida por la Corte Constitucional en la sentencia T-129 de 2011, y para ello, la Unidad Nacional de Restitución y la comunidad cuenta con el incidente de desacato en contra no sólo del INCODER, sino también en contra de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación quienes, respecto a esta situación han dejado de cumplir la orden de apoyo, acompañamiento y vigilancia que el Alto Tribunal les impusiera, para conseguir la materialización de todas y cada una de las órdenes protectoras de los derechos de la comunidad.

Así mismo, no puede olvidar la Unidad que el artículo 150 del decreto 4633 de 2011, le faculta para que en la etapa de estudio preliminar en que se encuentra:

[Solicite] al Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC– en conjunto con el Incoder, que dentro de los 30 días hábiles, realice la determinación del área del territorio a titular, ampliar, sanear o si corresponde, clarificar de acuerdo a lo establecido en Capítulo 3 del Decreto 2663 de 1994; igualmente, al Incoder, que en un plazo de hasta doce (12) meses inicie y termine los trámites de titulación, ampliación, saneamiento o clarificación; y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del círculo, que en un plazo cinco (5) días, realice la apertura de un folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación, y efectúe la inscripción de la medida de protección, indicando el trámite de titulación o seguridad jurídica a favor de la comunidad. Una vez culminado el trámite de titulación respectivo, el folio de matrícula se inscribirá a nombre de la comunidad.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel, fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

Solicitar al Incoder la realización y/o culminación de los procedimientos administrativos de constitución, saneamiento, ampliación de resguardos y/o de clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano.

Si bien en sus funciones transicionales, pudiera pensarse decretar la medida, ello comportaría una doble protección innecesaria, puesto que la Unidad tiene como se explicó mecanismos adecuados que cumplirían la misma función, inclusive con mayor eficacia que la acción transicional de medida cautelar, puesto que el juez de Restitución de tierras, a lo mucho podría ordenar –ante el continuado incumplimiento del INCODER– compulsar copias a los entes competentes disciplinarios, y continuar haciendo seguimiento<sup>27</sup>, mientras que el Juez incidental de desacato, tiene sanciones de arresto y pecuniarias, directas emanadas del artículo 52 del decreto de tutelas, ante la misma situación.

Ello comporta, por tanto un recurso potencializado inclusive frente al proceso de medidas cautelares, en cuanto a ésta pretensión.

**Respecto a la pretensión:**

*Que se ordene la inscripción de la medida en los predios colindantes sobre los que se advierte en dicha providencia [sentencia T-129 de 2011] posible acumulación de tierras, a saber (27006000400010312000, 27006000400010091000, 27006000300010084000, 27006000300010083000, entre otros).*

Este despacho encuentra que tal apreciación es sólo una interpretación de la apoderada, puesto que de las consideraciones del Alto tribunal, nada se colige respecto a acumulación de tierras colindante con el territorio, incluso, cuando en la sentencia la Corte señala: *En el mismo sentido, según el citado decreto, le compete adelantar estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras de las comunidades indígenas con el objeto de determinar los diferentes aspectos relacionados con la posesión, tenencia, propiedad, **concentración, distribución y disponibilidad de las tierras***. No hacía referencia a la situación en particular del territorio colectivo, sino a la función del INCODER.

Además de ello, no se demuestra que con el acto de acumulación o concentración de tierras alinderadas con lo que señala la URT debe ser el englobe del Resguardo de Chidima Tolo y el Resguardo de Pescadito, se esté afectando los derechos territoriales de la Comunidad solicitante.

---

<sup>27</sup> Cfr. Art. 178 ley 1448 de 2011



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

Razón por la cual, no resulta de interés para este proceso, dicha situación.

**7. Reconocimiento de formas asociativas distintas al Cabildo Indígena:**

*"Se ordene la suspensión del reconocimiento de Juntas de Acción Comunal o de cualquier otra forma político asociativo diferente al Cabildo Indígena dentro de las comunidades ancestrales."*

La jurisprudencia constitucional en sentencia T-513 de 2012 concluyó que la protección del principio de diversidad étnica y cultural obliga a, entre otros, los siguientes reconocimientos: **(i)** Que las comunidades indígenas son sujetos de derechos fundamentales; **(ii)** Que esos derechos no son equivalentes a los derechos individuales de cada uno de sus miembros ni a la sumatoria de estos; **(iii)** Que los derechos de las comunidades indígenas no son asimilables a los derechos colectivos de otros grupos humanos.

Para lo cual sostuvo la Corte en dicha sentencia, tras hacer un estudio de compatibilidad entre las instituciones JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL y CABILDO, que:

*No obstante, se reitera que, al no ser incompatibles per se, no puede concluirse que existe una prohibición absoluta de constituir juntas de acción comunal al interior de un resguardo indígena.*

*El anterior análisis lleva a la Sala a concluir que la autorización de funcionamiento de una junta de acción comunal al interior del territorio de un resguardo variará de acuerdo con la situación en que dicha autorización sea solicitada. Sin embargo, puede decirse que dicha decisión debe ser fruto de **i)** un acto que haya surgido de un proceso en el que la consulta previa a la comunidad haya sido uno de sus pasos<sup>28</sup>; o **ii)** un proceso de concertación entre quienes quieren constituir la junta de acción comunal y la comunidad indígena; o **iii)** la decisión autónoma de las autoridades tradicionales que gobiernan dicha comunidad de autorizar la creación de estos organismos de gestión comunal. Dicho proceso de concertación, en cualquiera de sus modalidades, se debería guiar por el principio de "mayor autonomía para la decisión de conflictos internos", cuyo mandato implica que el espacio decisorio debe ser mayor cuando el problema estudiado por el juez constitucional involucra solo a miembros de una comunidad que cuando el conflicto involucra dos culturas diferentes, debido a que en este último caso deben armonizarse principios esenciales de cada una de las culturas en tensión<sup>29</sup>. Una solución diferente desconocería la garantía constitucional a estos grupos reconocida con base de su diversidad cultural respecto de la población mayoritaria.*

---

<sup>28</sup> En este sentido resulta ilustrativa la sentencia T-601 de 2011.

<sup>29</sup> Sentencia T-349 de 1996 y sentencia SU-510 de 1998.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

De las pruebas se advierte que no existe ninguna JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL creada al interior del resguardo, sino que la junta de acción comunal es organizada por los colonos. Sin embargo, da cuenta este proceso dicha Junta de acción comunal ha pretendido imponer su voluntad a la comunidad y a sus líderes, respecto a situaciones que acaecen en territorio colectivo. Así por ejemplo, *el 24 de enero de 2015, dos hombres pasaron por el resguardo con una retroexcavadora según ellos con permiso del presidente de una junta de acción comunal de los colonos que ocupan el lote 3 del territorio titulado del Resguardo de Chidima, los cuales manifestaron que iban hacia Acandí y que dichos colonos les habían manifestado que podían pasar sin problema y que arreglaran la vía al pasar.*

*En otra ocasión, dos colonos se acercaron a la comunidad manifestando que los indígenas tenían que dejar pasar la maquinaria y construir la vía, ya que ellos se encontraban en proceso de legalización de la Junta de Acción Comunal ante la alcaldía de Acandí por lo que en adelante los indígenas tendrían que coordinar todo con los campesinos.*

*Y en otra ocasión, una indígena de la comunidad de Chidima Tolo, había acudido ante la Junta de Acción Comunal para interponer una queja, por lo cual exigieron a las autoridades tradicionales que se respetara la propiedad de la quejosa.*

De ahí que los hechos acaecidos desde el pasado el 24 de enero de 2015, resultan lesivos para la comunidad, y más aún el sometimiento que los colonos por estar organizados por una Junta de Acción comunal pretenden imponer a la comunidad, por tal razón se ordenará a la alcaldía Municipal de Acandí, tomar las medidas necesarias y efectivas en aras evitar que la Junta de Acción Comunal de los colonos se inmiscuya en los asuntos propios de la comunidad, o le imponga cargas a la comunidad respecto a su movilidad por el territorio ancestral.

Así mismo, se ordenará a la alcaldía municipal la realización del censo solicitado por la U.R.T., como medida de protección a la identidad cultural de la comunidad.

**8. REMISIÓN DE COPIAS A LA URT DE LOS EXPEDIENTES:**

*Se ordene al INCODER en liquidación y a la Agencia Nacional de Tierras, proteger salvaguardar y remitir al trámite del proceso con copia a la URT los expedientes completos sobre todos los trámites adelantados para la formalización de la propiedad colectiva de los dos*



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoertqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*resguardos, en aras de proteger el acervo probatorio necesario para culminar el proceso de caracterización de afectaciones de derechos territoriales actualmente suspendido.*

Evidentemente esta solicitud no se trata de una medida de protección a los derechos territoriales, sino una petición de pruebas, puesto que ninguna muestra de utilidad mostraría remitir a este procedimiento los expedientes completos sobre los trámites de formalización de la propiedad, siendo que ya se está adoptando la decisión.

De la misma manera, la finalidad de la petición de la URT, va a encaminada a *culminar el proceso de caracterización de afectaciones de derechos territoriales actualmente suspendido*, siendo que para tales efectos, el artículo 149 del decreto 4633 de 2011, que establece el trámite que debe surtir la solicitud de restitución en sede administrativa, establece que:

*Las solicitudes se remitirán a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.*

*Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas asumirá el estudio preliminar del caso y para tal efecto, dispondrá su documentación básica, apoyándose en las fuentes institucionales como el Incoder, las Oficinas de Instrumentos Públicos, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las demás de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas. (Resaltado fuera del texto).*

En virtud de lo anterior, no logra entender este despacho como es que la Unidad, no cuenta con los expedientes a la fecha, siendo que ya se encuentra en etapa de caracterización del predio. Pues es evidente que bases fundamentales para el inicio del estudio de caracterización es precisamente el estudio preliminar y de documentación que se establece en el artículo en cita. Pues tal como lo establece el párrafo de la misma norma, **Este estudio preliminar servirá de base para la adopción de medidas de protección, cautelares y el inicio de la caracterización de afectaciones territoriales, pero de ninguna manera sustituye dicha caracterización.**

Por ello, es necesario aclarar que existe una gran diferencia entre la función probatoria de la Unidad de Restitución y los derechos territoriales de la Comunidad, y entre ellas está la documentación necesaria del caso, lo cual no puede confundir, con ambigüedades de protección a favor de la comunidad, por tanto, la remisión de las copia de los expedientes en manos del INCODER, debía –dado el avance del procedimiento administrativo- estar en manos de la URT. Por lo que su falta de diligencia no puede suplantarla con una solicitud cautelar,



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoertqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

puesto que precisamente el parágrafo en cita, señala claramente también que el agotamiento adecuado de la fase de estudio preliminar sirve de base para la adopción de medidas cautelares. Pues no puede obviar la Unidad que siendo el proceso de restitución de carácter mixto consistente en una fase administrativa y una judicial<sup>30</sup>, tiene una serie de pasos que deben agotarse sin pretermisión de sus fases. Por tanto se negará la petición.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en restitución de tierras,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: ORDENAR** a la A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION (UNP), al COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS (CERREM) y al MINISTERIO DE DEFENSA a través de la(s) brigada(s) que opera(n) en la zona del resguardo indígena de Chidima Tolo y Pescadito, se realice el respectivo *estudio inmediato y urgente de las condiciones de seguridad de los líderes de comunidad, y de ser necesario* se adopten las medidas de protección que garanticen la seguridad, la vida, la libertad y la integridad de la los mismos. Para lo cual, se les otorgara el término de un (1) mes para la adopción de dichas medidas. So pena de investigaciones penales, disciplinarias y a las que hubiere lugar por el incumplimiento a la presente orden.

**SEGUNDO: ORDENESE** A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION (UNP), al COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS (CERREM) y al MINISTERIO DE DEFENSA a través de la(s) brigada(s) que opera(n) en la zona del resguardo indígena de Chidima Tolo y Pescadito, **ADOPTEN** medidas de protección colectiva que garanticen la seguridad, la vida, la libertad y la integridad de la comunidad. Para lo cual, se les otorgara el término de un (1) mes para la adopción de dichas medidas. So pena de investigaciones penales, disciplinarias y a las que hubiere lugar por el incumplimiento a la presente orden.

**TERCERO: ORDENAR** al MINISTERIO DEL INTERIOR, DIRECCIÓN DE ASUNTOS ETNICOS, DIRECCIÓN DE CONSULTA PREVIA, Y A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, en coordinación de la comunidad indígena y acompañamiento de la Unidad Especial Administrativa de Gestión de

---

<sup>30</sup> Cfr. Con la sentencia C-099 de 2013 de la Corte Constitucional. En este aspecto este despacho se aparta de la posición adoptada por la Sala Civil Especializada en restitución de tierras, quien en sentencia de Tutela presentada por la URT de tierras contra este Despacho, reseñó el proceso de restitución con sólo una etapa eminentemente transicional.



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

Restitución Tierras despojadas –Dirección de Asuntos Étnicos, se adopten procesos de fortalecimiento y dotación para la creación de la guardia indígena para los Resguardos asociados al Cabildo Mayor Indígena del Darién Chocoano-CAMIDACH.

**CUARTO: ABSTENERSE** de resolver sobre el diseño y puesta en marcha de un programa de desminado humanitario, por las razones expuestas en este auto.

**QUINTO: ORDENESE** a la GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ, a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACANDÍ, a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ (CODECHOCÓ) y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-seccional Chocó, implementación una estrategia integral para combatir la problemática de la extracción ilegal de minerales que actualmente se realiza en el territorio Colectivo de CHIDIMA TOLO Y PESCADITO, con el objeto y reglas establecidas en este auto.

**SEXTO: ORDENAR** a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, priorizar investigaciones para identificar, juzgar y condenar a los responsables de las amenazas y demás delitos contra las autoridades étnicas y/o miembros de la comunidad de los resguardos Chidima Tolo y Pescadito. Para lo cual deberá informar a este despacho el avance de las mismas semestralmente, contados a partir de la fecha de esta providencia.

**SEPTIMO: ORDENAR** a la alcaldía Municipal de Acandí, tomar las medidas necesarias y efectivas en aras evitar que la Junta de Acción Comunal de los colonos se inmiscuya en los asuntos propios de la comunidad, o le imponga cargas a la comunidad respecto a su movilidad por el territorio ancestral. Para ello, tendrá el término de un (1) mes para informar las medidas adoptadas.

**OCTAVO: NEGAR** la solicitud consistente en la inscripción de la medida en los 29 predios identificados en el acápite de identificación del territorio sobre los cuales hay pretensión de unificación, en aras de proteger el territorio ancestral ante la dilación injustificada en el procedimiento de ampliación y del acatamiento de las órdenes de la sentencia constitucional, por lo expuesto en este auto.

**NOVENO: NEGAR** la solicitud consistente en la inscripción de la medida en los predios colindantes sobre los que se advierte en dicha providencia [sentencia T-129 de 2011] posible acumulación de tierras, por lo señalado en esta providencia.





**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita –Quibdó –Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

**DÉCIMO: NEGAR** la solicitud consistente en ordenar a la Fuerza Pública que en el marco de los operativos contra el Clan Úsuga: se abstengan de levantar campamentos o puestos de mando en áreas del territorio ancestral de las comunidades del Resguardo, Por expuesto en este auto.

**DÉCIMO PRIMERO: NEGAR** la solicitud consistente en ordenar al INCODER en liquidación y a la Agencia Nacional de Tierras, proteger salvaguardar y remitir al trámite del proceso con copia a la URT los expedientes completos sobre todos los trámites adelantados para la formalización de la propiedad colectiva de los dos resguardos, en aras de proteger el acervo probatorio necesario para culminar el proceso de caracterización de afectaciones de derechos territoriales actualmente suspendido. Por lo dicho en esta providencia.

**DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR** a la Unidad Administrativa para la atención y reparación integral de las Víctimas (UARIV), al Departamento para la prosperidad Social (DPS) y al Instituto Colombiano de Bienestar familiar para que brinden de manera Urgente atención humanitaria y atención alimentaria a las personas (adultos, niños, niñas y adolescentes) de la Comunidad Indígena de CHIDIMA TOLO y PESCADITO. Se le otorga el término de un (1) mes.

**DÉCIMO TERCERO: ORDENAR** al MINISTERIO DEL INTERIOR, A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACNDÍ, que en asocio con las autoridades Indígenas del pueblo Embera CHIDIMA TOLO y PESCADITO, realicen el respectivo censo de la comunidad, así como de todas aquellas personas pertenecientes a familias no indígenas asentadas dentro del territorio de la comunidad. Para efectos del cumplimiento de la presente decisión se otorga un término de tres (3) meses.

**DÉCIMO CUARTO: ORDÉNESE** a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS-DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS, y a la UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, adelantar de manera Conjunta la caracterización integral de afectaciones de que habla el decreto 4633 de 2011, sobre el territorio indígena de CHIDIMA TOLO Y PESCADITO con la finalidad de que sirva como fundamento al proceso de restitución de derechos territoriales y la reparación integral de la comunidad en mención. La UAEGRT-DAE deberá dentro de los siguientes doce (12) meses, si se cumplen los requisitos necesarios, iniciar los procedimientos indicados.

En el caso de no iniciarse el proceso de restitución en los doce (12) meses siguientes a esta decisión, este despacho procederá a decidir en



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita -Quibdó -Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

el seguimiento a las medidas cautelares ordenadas, sobre si mantiene o no lo ordenado en esta providencia.

**DECIMO QUINTO: ORDENAR** a la PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS adscrita a este Despacho y la REGIONAL Y AGRARIA DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, así como a la DEFENSORÍA DELEGADA PARA ASUNTOS INDÍGENAS y a la DELEGADA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA, que apoyen, acompañen y vigilen el pleno cumplimiento del presente fallo, con el fin de garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos y órdenes adoptadas. Requerir los responsables, por la demora que en el cumplimiento de las mismas se presenten, usando si fuere el caso sus poderes disciplinarios. Por Secretaría General, ofíciase a las referidas entidades para que coordinen y creen la comisión pertinente para tal fin.

**DECIMO SEXTO: EXHORTAR** al señor DEFENSOR DEL PUEBLO DE COLOMBIA y al señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, se sirvan cumplir con las funciones en ellos delegadas, en la sentencia T-129 de 2011, en pro de la materialización y cumplimiento de lo ordenado en dicha sentencia, como garantías de los derechos fundamentales de la Comunidad CHIDIMA TOLO Y PESCADITO.

**DECIMO SEPTIMO: ACLARARSE** que la medida aquí adoptada como mecanismos urgente de protección, no relieves el cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-129 de 2011 emitida por la Corte Constitucional.

**DECIMO OCTAVO: SEGUIMIENTO**, el cumplimiento de las órdenes cautelares emitidas se señalaran y comunicaran a los entes responsables del cumplimiento, las fechas de audiencias, para que en las mismas muestren los avances su cumplimiento.

Notifíquese por secretaria a los solicitantes en su condición de representante legal de los resguardos indígenas CHIDIMA TOLO Y PESCADITO, la presente decisión y remítasele junto con ello copia de la providencia; en el mismo sentido a los Agentes del Ministerio público encargados del seguimiento de las órdenes impartidas en este proceso cautelar, así como a la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y la Tribunal Superior de Distrito Judicial de Quibdó.

República de Colombia



**Juzgado Primero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De  
Tierras De Quibdó**

---

Calle 21 No. 4 A-33 segundo piso, Barrio Yesquita -Quibdó -Chocó, tel. fax. (5) 6711223  
Email. j01cctoersrtqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

Por secretaría emítanse las respectivas comunicaciones.

**PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE y CUMPLASE,**



**MARIO JOSÉ LOZANO MADRID  
JUEZ**